Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México; de fecha nueve (09) de octubre de dos mil veinticuatro.

**VISTO** el expediente electrónico formado con motivo del recurso de revisión **01423/INFOEM/IP/RR/2024,** promovido por **un Usuario del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX)**, identificado como XXX XXX, en su calidad de **RECURRENTE,** en contra de la respuesta del **Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez,** en lo sucesivo el **SUJETO OBLIGADO**, por lo que se procede a dictar la presente resolución, con base en los siguientes:

**ANTECEDENTES**

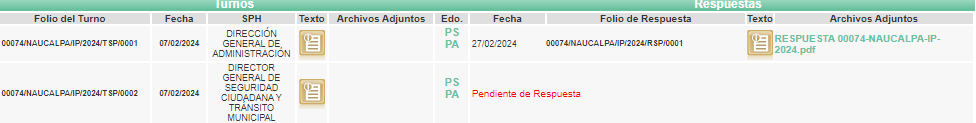
1. El siete de febrero de dos mil veinticuatro, se presentó ante el **SUJETO OBLIGADO** vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (**SAIMEX)**, la solicitud de información pública registrada con el número **00074/NAUCALPA/IP/2024,** mediante la cual se requirió lo siguiente:

*“-Curriculum Vitae en versión publica de alma delia arriola beltran secretaria tecnica adscrita a la dirección general de seguridad ciudadana y transito municipal de Naucalpan o área a fin, así como informar si la servidora publica cuenta con vehiculo oficial a su cargo y en caso afirmativo cuantos litros de gasolina de le brindan por semana así como como la justificación correspondiente para el uso de un vehículo oficial y la dotación de gasolina que se le otorga, por lo que se solicita el resguardo del vehiculo a su cargo, bitácora de gasolina del vehículo correspondiente, así como el seguimiento de los lugares oficiales visitados o que justifiquen el uso de dicho vehículo y la dotación de gasolina suministrado (dicha información desde el 2022 hasta la fecha de la presente solicitud) - de la misma servidora publica se solicita sea informado si se le otorgan prestaciones es extraordinarias como bonos, gratificaciones, compensaciones, viaticos u otros y de lo que resulte afirmativo se adjunte en versión publica los recibos o comprobantes que lo avalen desde el 2022 hasta la fecha de esta solicitud.” (Sic)*

1. Se hace constar que se señaló como modalidad de entrega de la información a través del **SAIMEX.**
2. El siete de febrero de dos mil veinticuatro, el **SUJETO OBLIGADO** realizó un requerimiento al Servidor Público Habilitado.
3. El veintiocho de febrero de dos mil veinticuatro, el **SUJETO OBLIGADO** notificó una prórroga para dar respuesta a la solicitud de información, en los siguientes términos:

*“…Con fundamento en el artículo 163 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se le hace de su conocimiento que el plazo de 15 días hábiles para atender su solicitud de información ha sido prorrogado por 7 días en virtud de las siguientes razones:*

*Derivado de la complejidad que implica la búsqueda de la información a la que desea acceder la persona solicitante, se amplía el plazo por 7 días hábiles para atender la solicitud de acceso a la información pública. …” (Sic)*



1. El once de marzo de dos mil veinticuatro, el **SUJETO OBLIGADO**dio respuesta a la solicitud de información, mediante oficio de fecha veintiséis de febrero de dos mil veinticuatro, firmado por el Director General de Administración, en los siguientes términos:

*“…se hace de su conocimiento que, después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y razonada en los archivos del Departamento de Control Vehicular, de esta Unidad Administrativa, no se encontró registro de que la C. Alma Delia Arriola Beltrán, tenga bajo su resguardo o a cargo, algún vehículo oficial; por ende, existe una imposibilidad material y jurídica para proporcionar información respecto de la cargas de gasolina, su justificación y resguardo del vehículo.*

*…El documento autorizado por esta Unidad Administrativa y propuesto ante la Dirección General de Administración y la Unidad de Transparencia es la Ficha Curricular, la cual contiene la escolaridad, habilidades y experiencia laboral, de los Funcionarios activos en el Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez. Por lo cual, adjuntamos al presente documento la Ficha Curricular de la Funcionaria solicitada por el peticionario.*

*… se informa que la Funcionaria de la cual solicita información en su petición no cuenta con prestaciones extraordinarias…” (Sic)*

Al archivo de referencia se adjuntó la ficha curricular de la C. Alma Delia Arriola Beltrán

Archivos electrónicos adjuntos:

[**Acta Quinta Sesión Ordinaria\_Punto 3\_Sol 72.24.pdf**](https://saimex.org.mx/saimex/solicitud/downloadAttach/1926906.page): Acta de la Quinta Sesión Ordinaria, de fecha ocho de marzo de dos mil veinticuatro, de la que se observa que en el tercer punto del orden del día correspondió al Análisis, discusión, en su caso, aprobación por parte del Comité de Transparencia para la Clasificación en su modalidad de Información Confidencial e Información Reservada contenida en los oficios generados por diversa servidora pública, para atender la solicitud de acceso a la información pública **00072/NAUCALPA/IP/2024**.

[**00074-NAUCALPA-IP-2024.pdf**](https://saimex.org.mx/saimex/solicitud/downloadAttach/1926907.page): Oficio DGSCYMS/SJ/JDNPA/ETAIP/28/2024, de fecha once de marzo de dos mil veinticuatro, por el que se da respuesta a la solicitud de la información pública, firmado por el Jefe de Departamento de Normatividad y Procedimientos Administrativos (ENLACE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA) por el cual se informó que la C. Alma Delia Arriola Beltrán no cuenta con vehículo oficial asignado a su cargo y como consecuencia no se genera ninguno de los documentos solicitados que acrediten la dotación de gasolina o para el control de vehículo, así mismo se informa que no recibe ningún tipo de prestaciones extraordinarias.

1. El catorce de marzo de dos mil veinticuatro, el **RECURRENTE** interpuso el recurso de revisión, en contra de la respuesta, señalando como:

**ACTO IMPUGNADO:** *“la negativa a otorgar la información pública solicitada****.” (Sic)***

**RAZONES O MOTIVOS DE INCONFORMIDAD:***“la falsa respuesta que otorga el sujeto obligado ya que se solicitó información acerca de "si la c. alma delia arriola beltran secretaria tecnica adscrita a la dirección general de seguridad ciudadana y transito municipal de Naucalpan o área a fin cuenta con vehiculo oficial a su cargo y en caso afirmativo cuantos litros de gasolina de le brindan por semana así como como la justificación correspondiente para el uso de un vehículo oficial y la dotación de gasolina que se le otorga, por lo que se solicita el resguardo del vehiculo a su cargo, bitácora de gasolina del vehículo correspondiente, así como el seguimiento de los lugares oficiales visitados o que justifiquen el uso de dicho vehículo y la dotación de gasolina suministrado (dicha información desde el 2022 hasta la fecha de la presente solicitud) ya que la respuesta fue que no se encontró registro de que la servidora pública tenga bajo su resguardo algún vehículo oficial; sin embargo a dicha servidora publica se le ha visto llegar en una Ford Ranger blanca sin cromática, misma que es propiedad del municipio de naucalpan de juarez y que tiene asignado un lugar de estacionamiento en el patio de la comisaria frente a los baños, dicha unidad la utiliza Alma Arriola Beltran como vehículo particualr ya que se la lleva a su casa, a sus comidas, a sus eventos que acude de caracter personal y familiar y nada que ver con las labores que desempeña y la misma unidad acude a cargar gasolina cuando todas las unidades oficiales lo hacen y es tripulada indistintamente por esta servidora pública o algún oficial adscrito a la oficialía de partes y que son subordinados de la misma; por lo cual se está negando la información solicitada y no obstante se está dando una información falsa por lo que se deberá dar parte a la contraloría interna municipal y la autoridad ministerial que corresponda; no obstante se deberá proporcionar la información real que se solicita o en su defecto informar el motivpo de que dicha servidora utiliza la Ford Ranger propiedad de municipio de naucalpan de juárez y adscrita al parque vehicular de la direccion general de seguridad ciudadana y movilidad segura de naucalpan.****”*** *(Sic)*

1. Se registró el recurso de revisión bajo el número de expediente al rubro indicado, asimismo con fundamento en lo dispuesto por el artículo 185 fracción I de la **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios** se turnó a la **Comisionada María del Rosario Mejía Ayala,** con el objeto de su análisis.
2. La Comisionada Ponente con fundamento en lo dispuesto por el artículo 185 fracción II de la ley de la materia, a través del acuerdo de admisión del quince de marzo de dos mil veinticuatro, puso a disposición de las partes el expediente electrónico vía **SAIMEX** a efecto de que en un plazo máximo de siete días manifestaran lo que a derecho convinieran, ofrecieran pruebas y alegatos según corresponda al caso concreto, de esta forma para que el **SUJETO OBLIGADO** presentara el informe justificado procedente.
3. El cuatro de abril de dos mil veinticuatro, el **SUJETO OBLIGADO** rindió el informe justificado correspondiente por medio del siguiente archivo electrónico:

***DGSCMS-SJ-JNPA-ETAIP-035-2024.pdf:*** Oficio DGSCMS/SJ/JNPA/ETAIP/035/2024, de fecha veintiuno de marzo de dos mil veinticuatro, suscrito por el Jefe de Departamento de Normatividad y Procedimientos Administrativos (Enlace de Transparencia y Acceso a la Información Pública) del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, por medio del cual, reiteró el contenido del oficio DGSCYMS/SA/0790/2024, suscrito por el Subdirector de Administración de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, en el que señaló que la servidora pública Alma Delia Arriola Beltrán, no cuenta con vehículo oficial a su cargo y como consecuencia no se ha generado documento alguno referente a la dotación de gasolina, bitácora de gasolina, resguardo del uso del vehículo a cargo de dicha servidora pública, por lo tanto, no obra dentro de los archivos de esa Subdirección de Administración.

1. Por su parte, el **RECURRENTE** no presentó pruebas ni alegatos, según consta en el **SAIMEX.**
2. **Ampliación para resolver y cierre de instrucción**

El diez de junio de dos mil veinticuatro, la Comisionada Ponente notificó el acuerdo mediante el cual se amplió el plazo para emitir resolución. Al respecto, es de señalar que este organismo garante no pasa por alto justificar, que la dilación en la resolución del presente asunto encuentra justificación en el alto número de recursos de revisión recibidos se ha incrementado el número de medios de impugnación que deben resolverse por este Instituto, circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la proyección de las resoluciones a dichos medios de impugnación.

1. Por ello, es menester precisar que, si bien se ha excedido el plazo para resolver el **presente** medio de impugnación, de conformidad con la ley de la materia, dicha dilación es de carácter excepcional y se encuentra justificada en los elementos para medir la razonabilidad del plazo de resolución de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.
2. Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.
3. En ese sentido, el legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.
4. Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad de dicha dilación atendiendo a los siguientes criterios:
5. Complejidad del Asunto: La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.
6. Actividad Procesal del interesado. Acciones u omisiones del interesado.
7. Conducta de la Autoridad: Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.

d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso: Violación a sus derechos humanos.

1. De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.
2. Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro *“TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ* INDEBIDAMENTE *POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.”*, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.
3. Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.
4. Por ello, este organismo garante comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados, señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto, resulta de carácter excepcional.
5. Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

*“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO.” consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351.*

*“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.”, visible en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350.”*

1. Seguidamente, la Comisionada Ponente decretó cierre de instrucción mediante el acuerdo del ocho de octubre de dos mil veinticuatro; por lo que ordenó turnar el expediente a resolución, misma que ahora se pronuncia; y

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. De la competencia**

1. Este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por el Recurrente conforme a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos trigésimo, trigésimo primero y trigésimo segundo, fracciones IV y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 1, 2 fracción II, 13, 29, 36 fracciones I y II, 176, 178, 179, 181 párrafo tercero y 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 6, 9 fracciones I y XXIII, y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**SEGUNDO. De la oportunidad y procedencia.**

1. El medio de impugnación fue presentado a través del **SAIMEX,** en el formato previamente aprobado para tal efecto y dentro del plazo legal de quince días hábiles otorgados; siendo así que el **SUJETO OBLIGADO** entregó respuesta a la solicitud el once de marzo de dos mil veinticuatro, de tal forma que el plazo para interponer el recurso de revisión transcurrió del doce de marzo al nueve de abril de dos mil veinticuatro; en consecuencia, presentó su inconformidad el catorce de marzo de dos mil veinticuatro, por lo que se encuentra dentro de los márgenes temporales previstos en el artículo 178 de la **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios** vigente.
2. Por otro lado, el escrito contiene las formalidades previstas por el artículo 180 último párrafo de la Ley de la materia actual, por lo que es procedente que este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, conozca y resuelva el presente recurso.

**TERCERO. Del planteamiento de la *Litis.***

1. El recurso revisión tiene como finalidad reparar cualquier posible afectación al Derecho de Acceso a la Información Pública en términos del Título Octavo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y determinar la confirmación; revocación o modificación; desechamiento o sobreseimiento; y, en su caso, ordenar la entrega de la información respecto a la falta de respuesta por parte del **SUJETO** **OBLIGADO**.
2. Ahora bien, como ya se ha señalado, el **RECURRENTE** requirió currículum vitae en versión publica de Alma Delia Arriola Beltrán, Secretaria Técnica adscrita a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Naucalpan o área afín; informar si la servidora pública cuenta con vehículo oficial a su cargo, en caso afirmativo cuántos litros de gasolina le brindan por semana, justificación correspondiente para el uso de un vehículo oficial, la dotación de gasolina que se le otorga, resguardo del vehículo a su cargo, bitácora de gasolina del vehículo correspondiente, seguimiento de los lugares oficiales visitados o que justifiquen el uso de dicho vehículo y la dotación de gasolina suministrada desde el año 2022 a la fecha de la solicitud; así también se informara si le otorgan prestaciones extraordinarias como bonos, gratificaciones, compensaciones, viáticos u otros y de lo que resulte afirmativo se adjunte en versión pública los recibos o comprobantes que lo avalen desde el 2022 hasta la fecha de la solicitud.
3. En respuesta, el **SUJETO OBLIGADO** por medio del Director General de Administración del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, informó que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y razonada en los archivos del Departamento de Control Vehicular, no se encontró registro de que la C. Alma Delia Arriola Beltrán, tuviera bajo su resguardo o a cargo, algún vehículo oficial por ende, existía una imposibilidad material y jurídica para proporcionar información respecto de las cargas de gasolina, su justificación y resguardo del vehículo. En dicha respuesta se adjuntó la ficha curricular de la servidora pública aludida y por último informó que la C. Alma Delia Arriola Beltrán, no contaba con prestaciones extraordinarias.
4. Inconforme con la respuesta, el ahora **RECURRENTE** interpuso el recurso de revisión, señalando: “*por lo cual* ***se está negando la información solicitada*** *y no obstante se está dando una información falsa por lo que se deberá dar parte a la contraloría interna municipal y la autoridad ministerial”,* pretendiendo actualizar la hipótesis normativa relativa a la entrega de la información.

**Cuarto. De estudio y resolución.**

1. Primeramente señalar que con base en las razones anteriormente trascritas, de las que se desprende que la particular no impugna la totalidad de rubros que integraron su solicitud de información, al respecto, se observa que el particular se duele únicamente por el rubro, a saber: “*…cuenta con vehiculo oficial a su cargo y en caso afirmativo cuantos litros de gasolina de le brindan por semana así como como la justificación correspondiente para el uso de un vehículo oficial y la dotación de gasolina que se le otorga, por lo que se solicita el resguardo del vehiculo a su cargo, bitácora de gasolina del vehículo correspondiente, así como el seguimiento de los lugares oficiales visitados o que justifiquen el uso de dicho vehículo y la dotación de gasolina suministrado (dicha información desde el 2022 hasta la fecha de la presente solicitud) ya que la respuesta fue que no se encontró registro de que la servidora pública tenga bajo su resguardo algún vehículo oficial; sin embargo a dicha servidora publica se le ha visto llegar en una Ford Ranger blanca sin cromática, misma que es propiedad del municipio de naucalpan de juarez y que tiene asignado un lugar de estacionamiento en el patio de la comisaria frente a los baños, dicha unidad la utiliza Alma Arriola Beltran como vehículo particualr ya que se la lleva a su casa, a sus comidas, a sus eventos que acude de caracter personal y familiar y nada que ver con las labores que desempeña y la misma unidad acude a cargar gasolina cuando todas las unidades oficiales lo hacen y es tripulada indistintamente por esta servidora pública o algún oficial adscrito a la oficialía de partes y que son subordinados de la misma; por lo cual se está negando la información solicitada y no obstante se está dando una información falsa …”* (Sic),
2. Luego entonces, por lo que lo referente a la entrega de información de currículum vitae y si la servidora pública cuenta con prestaciones extraordinarias, se deben tener como actos consentidos, lo anterior por no haber hecho pronunciamiento de impugnación a este punto de la solicitud.
3. Por lo anterior, al no existir inconformidad del resto de información entregada, es que se tiene por consentida, yaque la falta de impugnación respecto de los requerimientos que no fueron manifestados en el recurso de revisión, debe entenderse como **actos consentidos**.
4. Esto es así, debido a que cuando el recurrente impugna la respuesta del sujeto obligado y éste no expresa razón o motivo de inconformidad en contra de todos los rubros solicitados, los mismos deben declararse firmes, pues se entiende que el recurrente ésta conforme con la información entregada al no contravenir la misma. Sirve de apoyo por analogía, la Tesis Jurisprudencial Número 3ª./J.7/91, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta bajo el número de registro 174,177, que establece lo siguiente:

***“REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES.****Cuando algún resolutivo de la sentencia impugnada afecta a EL RECURRENTE, y ésta no expresa agravio en contra de las consideraciones que le sirven de base, dicho resolutivo debe declararse firme. Esto es, en el caso referido, no obstante que la materia de la revisión comprende a todos los resolutivos que afectan a EL RECURRENTE, deben declararse firmes aquéllos en contra de los cuales no se formuló agravio y dicha declaración de firmeza debe reflejarse en la parte considerativa y en los resolutivos debe confirmarse la sentencia recurrida en la parte correspondiente.”*

(Énfasis añadido)

1. Consecutivamente, **la parte de la respuesta que no fue impugnada debe** declararseconsentida **por el recurrente, toda vez que no realizó** manifestaciones **de inconformidad**; por lo que, no pueden producirse efectos jurídicos tendentes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado ya que se infiere su consentimiento ante la falta de impugnación eficaz. Sirve de sustento a lo anterior por analogía la tesis jurisprudencial número 176,608 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice:

***“ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO.****Debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó por el medio establecido por la ley, ya que si se hizo uso de otro no previsto por ella o si se hace una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz.”*

(Énfasis añadido)

1. Ahora bien, del análisis realizado a las documentales que integran el expediente electrónico **SAIMEX**, se presume al haber existido un pronunciamiento por parte del **SUJETO OBLIGADO**, aún más del Servidor Público Habilitado correspondiente, a quien le fue requerida la información; y se señala que no existe registro de que la servidora pública antes señalada, tuviera bajo su resguardo o cargo algún vehículo oficial, existiendo imposibilidad material y jurídica de proporcionar información respecto de las cargas de gasolina, y su justificación; en ese mismo sentido, en la respuesta se señaló que dicha servidora pública, no contaba con prestaciones extraordinarias. Es decir, le fue proporcionada la información solicitada que sí obraba en los archivos del sujeto obligado, en tanto que como respuesta a otra parte de su solicitud se informó que en **los archivos no se encontró la información solicitada, por no haberse generado, poseído o administrado, se trata de un hecho negativo**; en este sentido, se obvia que no puede fácticamente obrar en los archivos del **SUJETO OBLIGADO**, ya que no puede probarse por ser lógica y materialmente imposible, y al no haber existido, no cuenta con la misma.
2. Así, no se trata de un caso por el cual la negación del hecho implique la afirmación de este, simplemente se está ante una notoria y evidente inexistencia fáctica de la información solicitada.
3. Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios el **SUJETO OBLIGADO** sólo proporcionará la información que se les requiera y que obre en sus archivos, lo que a *contrario sensu* significa que no se está obligado a proporcionar lo que no obre en sus archivos; destacando entonces que el Pleno de este Organismo Garante, ha sostenido que ante la presencia de un hecho negativo, resultaría innecesaria una declaratoria de inexistencia, en términos de los artículos 19, 169 y 170 de la Ley de la materia, y ante un hecho negativo resulta aplicable la siguiente tesis:

***HECHOS NEGATIVOS, NO SON SUSCEPTIBLES DE DEMOSTRACIÓN.*** *Tratándose de un hecho negativo, el Juez no tiene por qué invocar prueba alguna de la que se desprenda, ya que es bien sabido que esta clase de hechos no son susceptibles de demostración. Amparo en revisión 2022/61. José García Florín (Menor). 9 de octubre de 1961. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos.*

1. De igual forma, es aplicable el criterio 7/2017, emitido en la Segunda Época por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el cual señala lo siguiente:

*Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la información. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la información. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; y además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información.*

Por otro lado, respecto de las aseveraciones relativas a que la información entregada es falsa, es dable sostener que, al haber existido un pronunciamiento por parte del **SUJETO OBLIGADO**, es de explorado derecho que este Órgano Garante carece de facultades para dudar de la veracidad de la respuesta emitida. Por lo anterior resulta necesario puntualizar con claridad que este Órgano Garante no está facultado para pronunciarse sobre la veracidad de la información que los Sujetos Obligados ponen a disposición de los solicitantes; situación que se aleja de las atribuciones de este Instituto, *máxime* que **al momento que ponen a disposición ésta, la misma tiene el carácter oficial y se presume veraz, tan es así que la misma queda registrada en el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX).**

1. Así mismo, la **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios** establece que la información pública generada, administrada o en posesión de los Sujetos Obligados en ejercicio de sus atribuciones, será accesible de manera permanente a cualquier persona, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información, por lo que deberán apegarse en todo momento a los criterios de publicidad, veracidad, oportunidad entre otros, numeral en comento que a la letra señala;

*Artículo 3.- La información pública generada, administrada o en posesión de los Sujetos Obligados en ejercicio de sus atribuciones, será accesible de manera permanente a cualquier persona, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información.* ***Los Sujetos Obligados deben poner en práctica, políticas y programas de acceso a la información que se apeguen a criterios de publicidad, veracidad, oportunidad, precisión y suficiencia en beneficio de los solicitantes.***

1. Numerales que compelen al **SUJETO OBLIGADO** a apegarse en todo momento a los criterios ya expuestos, impidiendo a este Órgano Colegiado cuestionar la veracidad de la información. En ese contexto, en razón del artículo 166 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que establece que la obligación de acceso a la información pública se tendrá por cumplida cuando el solicitante tenga a su disposición la información requerida, se tiene por colmado el derecho de acceso a la información pública del particular.
2. En consecuencia, este Órgano Garante determina que se atendió cabalmente el derecho de acceso a la información ejercido por el **RECURRENTE**, debido a que el **SUJETO OBLIGADO** dio atención a lo requerido por medio del Servidor Público Habilitado correspondiente. En esta misma tesitura, el derecho de acceso a la información pública, consiste en que la información solicitada conste en un soporte documental en cualquiera de sus formas, a saber: **expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias** de los Sujetos Obligados; los que, podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico, de conformidad con el artículo 3, fracción XI, de la Ley de la materia, el cual dispone lo siguiente:

*“****Artículo 3.*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*(…)*

***XI. Documento:*** *Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro* ***registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados****, sus servidores públicos e integrantes,* ***sin importar su fuente o fecha de elaboración.*** *Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;*

*(…)”*

1. Además, es importante señalar que el artículo 18, de la Ley en la materia, los Sujetos Obligados cuentan con la obligación de documentar todos los actos que deriven de sus atribuciones, funciones y competencia desde su origen la eventual y reutilización de la información que generen; por lo tanto, toda la información que sea generada, posea y administre, es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona, privilegiando el principio de máxima publicidad de la misma, por ello, debe ser proporcionada siempre y cuando se halle en los archivos documentales de los Sujeto Obligados y en las condiciones que se encuentre, la cual no podrá sufrir modificaciones o procesamiento, no presentarla conforme a los interés de los particulares, como de igual forma los Sujeto Obligados no deberán de generar, resumir o efectuar cálculos o practicar investigaciones.
2. De la misma forma, de acuerdo al contenido del artículo 160, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que a la letra dispone:

***Artículo 160****. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.*

1. Además, a Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, prevé en su artículo 23, fracción IV, que son Sujetos Obligados a Transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos que obren en su poder:

***Artículo 23.*** *Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder:*

***IV.*** *Los ayuntamientos y las dependencias, organismos, órganos y entidades de la administración municipal;*

1. Finalmente, no pasa desapercibido que el ahora recurrente en el acto impugnado manifestó: “…*deberá dar parte a la contraloría interna municipal y la autoridad ministerial que corresponda…”* (Sic.)*;* al respecto, es de señalar que el recurso de revisión es la garantía secundaria mediante la cual se pretende recupera cualquier posible afectación al derecho de acceso a la información pública; no así la vía para interponer quejas o denuncias, motivo por el cual no se atenderá lo requerido por el particular en el presente proveído; no obstante se dejan a salvo sus derechos para que interponga las quejas o denuncias que a sus interese convenga ante las autoridades competentes.
2. En este sentido y una vez analizadas las constancias que obran en el Sistema de Acceso a la Información Pública Mexiquense (SAIMEX), así como la solicitud de información, el acto impugnado y las razones o motivos de inconformidad, este Instituto, conforme a los principios de Certeza, Eficacia, Imparcialidad, Objetividad y Máxima Publicidad consagrados en el artículo 9 de la Ley de Transparencia Local, determinó que los motivos de inconformidad planteados por la parte **Recurrente** resultan infundados; por ello **con fundamento en la segunda fracción del artículo 186** de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se **CONFIRMA** la respuesta proporcionada a la solicitud de información que ha sido materia del presente estudio.
3. Por lo anteriormente expuesto y fundado, este **ÓRGANO GARANTE** emite los siguientes:

**R E S O L U T I V O S**

**PRIMERO.** Se **CONFIRMA** la respuesta entregada por el **Sujeto Obligado** a la solicitud de información **00074/NAUCALPA/IP/2024** por resultar infundados los motivos de inconformidad argüidos por la parte **Recurrente**, en términos del considerando **CUARTO** de la presente Resolución.

**SEGUNDO. Notifíquese** a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense **(SAIMEX)** la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del **SUJETO OBLIGADO.**

**TERCERO. Notifíquese** al **RECURRENTE** la presente resolución, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense **(SAIMEX).**

**CUARTO.** Se hace del conocimiento del **RECURRENTE** que, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en caso de que considere que la resolución le cause algún perjuicio podrá impugnarla vía juicio de amparo en los términos de las leyes aplicables.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS; MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA; SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ; LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA; EN LA TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL NUEVE (09) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.